

24. Las prohibiciones de la Iglesia no tuvieron otro fin que asegurar la manutención de los ministros, el sosten del culto divino, el socorro de los pobres, ect., y tambien el de cumplir con la voluntad de los bienhechores, cuando en las donaciones voluntarias hechas á la Iglesia, espresaron desde el principio ser su voluntad la de que los bienes donados no se enagenasen jamas.

25. Mas si estos mismos objetos demandaron la enagenacion, por no ser posible atenderlos de otro modo, ó cuando en las donaciones voluntarias ocurrieron circunstancias extraordinarias que sin la enagenacion se perderia todo, la misma Iglesia dispuso y proveyó entonces la enagenacion, previa la calificación de causales y demas requisitos que dicen sus leyes, y pueden verse en cualquiera libro de jurisprudencia canónica.

26. La calificación de causas para la enagenacion, lo mismo que prestar el consentimiento para ella, no pueden tocar á otro que á la Iglesia, porque al dueño y no á otro toca disponer de lo suyo. Segun la diversidad de cosas que pueden ser raíces ó muebles, preciosas ó comunes, ect., así tambien deben de concurrir causas mas ó menos graves para la enagenacion, mas ó menos requisitos y solemnidades, y aun diversidad de personas que á nombre de la Iglesia hagan la calificación correspondiente y presten su licencia y consentimiento. Así es, v. g., que para cosas de menos valor, basta la licencia del rector de una Iglesia; en otras de mayor entidad, se requiere la del obispo; en otras, la de este y de su clero juntamente, y en otras la del romano pontífice. Todo esto está ya determinado con anticipacion por la misma Iglesia.

RESUMEN DE LA DOCTRINA QUE QUEDA INDICADA.

27. Resulta, pues, que la forma del tesoro de la Iglesia, comenzó en Jesucristo, quien sin contar para nada con otro poder que con el suyo propio dió á la Iglesia un derecho cierto y de justicia para adquirir los bienes necesarios á toda sociedad entre hombres, para administrarlos, invertirlos y enagenarlos con pleno poder y sin dependencia de nadie; que este poder de la Iglesia tan cierto é indudable fué en tiempo de la persecucion como fuera de él; que el derecho humano pudo reconocer ó no reconocer este derecho de la Iglesia, pudo protegerlo ó resistirlo; pero que ni pudo ni podrá jamas quitarle un ápice de la justicia interna y solidez con que lo posee la Iglesia, ni darle fuerza alguna intrínseca, mayor que la que tiene desde su principio, segun voluntad de Jesucristo.

28. El poder humano tiene una inspeccion general y suprema sobre las personas y sobre los bienes todos, sean de quien se fueren, mas no se trata de esto, sino de las disposiciones particulares relati-

vas á tales mas cuales bienes como propios de la Iglesia. Esta sociedad santa que se llama Iglesia compuesta de hombres y con derecho cierto á los bienes temporales necesarios, tuvo por principio ú origen única y exclusivamente á Jesucristo, y su existencia y duracion hasta el fin de los siglos no dependerá jamas sino única y exclusivamente del mismo Jesucristo. El poder humano no tuvo ni pudo tener parte alguna en la fundacion de la Iglesia; y ni la tiene ni la tendrá jamas en su existencia y duracion; ¿qué autoridad, pues, podrá ejercer en particular con respecto á lo que por voluntad de Jesucristo toca y pertenece á la Iglesia?

29. En estas razones me fundaba yo cuando en mi carta de 23 de Febrero dije: que sobre este punto eran incompetentes las disposiciones de la potestad secular, y faltas y desnudas de justicia intrínseca.

LEYES PUBLICAS SOBRE LA MISMA MATERIA.

30. No temo hablar de las leyes que la autoridad secular dió tambien desde el principio de la Iglesia con relacion á ella; estoy cierto de que los tiempos que han pasado por la Iglesia, los que actualmente pasan y los que pasarán hasta el fin de los siglos, todos vendrán dispuestos por la Providencia, y de que en todos ellos, la Iglesia, sus derechos, su libertad, su soberanía é independencia, todo será lo mismo, porque su autor y cabeza *Jesucristo, es el mismo hoy que ayer, y el mismo por siempre*; y porque le prometió asistir *la todos los dias hasta la consumacion de los siglos* [1].

31. Las leyes del poder humano serán tambien lo que siempre han sido, varias, inconstantes y tal vez contrarias entre sí, aun en un mismo lugar y casi entre unas mismas, número de personas, y con poca mediacion de tiempo de unas á otras. Las obras de los hombres no tienen otro carácter.

32. Pues hablando de estas leyes digo: que las primeras que se dieron favorables á la Iglesia, fueron las que hicieron cesar la persecucion de trescientos años, las que reconocieron lo que era la Iglesia de Jesucristo, y las que la dejaron usar de sus derechos primitivos y naturales.

33. Dese á estas leyes el nombre que se quiera, en la realidad no fueron otra cosa que un reconocimiento público del error con que se procedió antes contra la Iglesia, y una protesta solemne de la defensa y proteccion que se le dispensaba ya; pero el poder humano ¿pudo alguna ocasion ejercerse mas noble y debidamente que protegiendo y amparando al que tiene la razon y justicia de su parte?

[1] Ad Heb. cap. III v. VIII.—S. Math. cap. 28 v. XX.

34. Hubo otras leyes dadas en consecuencia de otra clase de beneficios hechos á la Iglesia: ¿quién podrá negar la generosidad de Constantino el Grande, de Cárlo-Magno y de otros príncipes de todos los países donde sonó el nombre cristiano? Pues si estos bienhechores de la Iglesia desearon la perpetuidad de sus beneficios, y por el carácter público y poder que tenían dieron leyes relativas á los bienes que voluntariamente pusieron en manos de la Iglesia, no hay duda de que usaron de su derecho, porque cualquiera es supremo legislador de lo suyo propio [1], y la Iglesia respetó siempre y cumplió aun las disposiciones privadas de un particular bienhechor suyo.

35. Pertenecen á esta clase de leyes las que dieron los emperadores y reyes cristianos, ya dando facultad para que cualquiera pudiese en vida ó en muerte donar bienes á la Iglesia, ya concediendo á ésta mas ó menos franquicias, ya fijando el modo y forma de sus adquisiciones, &c.

36. Todavía hay otra tercera clase de leyes, que en cierto modo podia reducirse á la primera, pero que me ha parecido mejor distinguir por separado para mayor claridad. Esta clase de leyes son las en que no se contiene otra cosa que las mismas disposiciones de la Iglesia, sin otra diferencia que la forma. Mas semejantes leyes, lejos de estar dirigidas á la Iglesia, ni de coartar de modo alguno su libertad y jurisdiccion, antes bien son una aceptacion solemne de lo que ella dispone, hecha por la autoridad pública, y como el mejor modo de manifestar su obediencia y veneracion hácia la Iglesia. El código justiniano y la inmortal obra de las siete Partidas, abundan de esta clase de leyes.

37. De ninguna de las tres clases insinuadas hablo yo en mi carta de Febrero, sino de otra cuarta clase de leyes que se han dirigido á la Iglesia sobre puntos que ella no haya determinado, y que en ningun tiempo tocarán á otro que á ella misma.

38. De semejante naturaleza son la ley de 31 de Agosto de 43, y la circular de 13 de Enero de este año, que la reproduce en lo general; y aun le agrega algo mas, como era de temerse, porque regularmente á un avance se sigue otro avance.

39. La ley de 31 de Agosto contiene los siete artículos siguientes:

- 1.º Se prohíbe bajo la pena de nulidad todo género de enagenacion de las alhajas preciosas, y de cualquiera obra de oro, plata y piedras preciosas que existan en los templos de la nacion y que hayan sido construidas para el servicio del culto ú ornato de las imágenes ó de los templos.
- 2.º Todo el que verifique cualquiera enagenacion en contraven-

(1) Tal es la ley que pone el Graciano en el cánón 2.º caus. 10 enest. 2.º

cion del artículo anterior, incurrirá en el delito de robo y en las penas que las leyes señalan á los que roban bienes de la clase de los espresados.

3.º El comprador de dichos bienes se reputará cómplice, y tendrá la misma pena que el vendedor.

4.º Se podrán perseguir estos delitos por accion popular, y cualquiera tiene derecho tambien para denunciarlos.

5.º Será caso de estrecha responsabilidad á los jueces respectivos el desatender las denuncias que se les hagan, el no dar curso á las acusaciones y el obrar con morosidad en la prosecucion de estas causas.

6.º Siempre que con cualquiera de dichas alhajas, se quiera hacer otra nueva de la propia materia, deberá prececer licencia de la primera autoridad política del partido, la que bajo su responsabilidad podrá concederla, asegurándose previamente de que no disminuya su valor en la renovacion.

7.º Todas las autoridades eclesiásticas tanto diocesanas como regulares, prestarán su cooperacion para cuidar del cumplimiento de este decreto, encargándoles ausilien segun sus facultades el que estas disposiciones tengan su efecto, como que son dirigidas á objetos tan sagrados, y de que deben celar dichas autoridades segun su propia institucion.

40. No debo callar la buena fé con que se procedió por el supremo gobierno cuando tuvo noticia de la protesta que contra la dicha ley hizo el Ilmo. Sr. obispo de Morelia Dr. D. Juan Cayetano Portugal, en 22 de Setiembre del mismo año, porque inmediatamente en 1.º de Octubre pasó la ley á consulta de los señores Peña y Peña, y Jáuregui, para que dictaminasen sobre si el supremo gobierno habia obrado al darla dentro de la órbita de sus facultades naturales; y esta misma buena fé es fácil advertir en otras leyes antiguas y modernas dictadas á la Iglesia sin facultad alguna para dárselas, pero causadas y sostenidas injustamente por gentes que acaso no han aprendido otro arbitrio para medrar que la adulacion, ó que bajo la capa de celo por los derechos públicos de los príncipes, han saciado algun mal afecto hácia la Iglesia.

41. Estoy muy distante de creer que los señores que dictaminaron hubiesen sido movidos por uno ú otro principio; mas lo estoy tambien igualmente distante de creer que su juicio tenga solidez alguna. Para espresar los fundamentos que tengo para decir esto, voy á hacerme cargo del dictámen del Sr. Peña y Peña, admitiendo á su señoría como testo intachable el que se propuso seguir, que es el Código de las siete partidas.

DICTAMEN DEL SR. PEÑA Y PEÑA SOBRE LA LEY DE 31 DE AGOSTO DE 1843.

42. La introducción á las leyes del título 15 partida 1.^a que trata *De las cosas de la Iglesia que non se deven enagenar*, dice á la letra: "Acuciosos é entremetidos deben ser los emperadores. é los reyes é los otros grandes señores que han de guardar los pueblos é las tierras de non dejar enagenar locamente las cosas de su señorio. E si esto deven fazer en los bienes de cada uno, cuánto mas lo deven fazer en los de las Egleſias, que son casas de oración é logares en donde Dios debe ser servido é loado. E de los bienes de tales logares como estos, non debe ser fecha mala barata, porque sean empobrecidos é hayan de menguar por ende en el servicio de Dios que se ha de cumplir con ellos. Onde pues que en el título ante deste fablamos de los cementerios é de las egleſias, é de las sepolturas; conviene que sea mostrado en esto de las otras cosas que pertenescen á las egleſias, cómo se pueden dar, ó enagenar ó non. E mostrar primeramente qué cosa es enagenamiento. E por cuáles razones se pueden enagenar las cosas de la Iglesia. E quién lo puede fazer, é en qué manera puede ser esto fecho. E qué pena deben haber los que enagenaren maliciosamente, otrosi los que lo recibieren."

43. El Sr. Peña y Peña copió en su dictámen muy fielmente gran parte de esta introducción; mas cualquiera advertirá que si las leyes que siguen á esta introducción no dicen lo que el Sr. Peña y Peña quiso sacar de ella, el espíritu del legislador fué distinto. En la introducción fija el legislador los puntos de que iba á hablar: ¿cómo puede prescindirse de lo que con respecto á ellas dice? ¿ó qué argumento racional puede formarse de sola la introducción?

44. Todas las leyes de este título son de la tercera clase de leyes públicas que dije en el núm. 36, es decir, leyes que no contienen sino disposiciones de la misma Iglesia, acatadas y respetadas de un modo público y solemne por el sabio autor de las Partidas; y no hay una siquiera que salga de esta clase. No puede por lo mismo probarse con ellas que la autoridad secular tenga derecho para dar leyes á la Iglesia, sobre los puntos que abraza la ley de 31 de Agosto de 43, que es el fin con que el Sr. Peña y Peña copió la introducción. Analicemos estas leyes y nos convenceremos de lo verdad.

45. La ley primera espresa seis causas que puede haber para la enagenación de bienes de las iglesias, causas anticipadamente asignadas por los sagrados cánones y sus comentadores, como lo advierte el Sr. Gregorio López en sus notas á esta ley, sin que haya en ella disposición alguna que pueda decirse nueva.

46. La segunda dice el orden con que, concurriendo alguna de las causas indicadas, ha de procederse á la enagenación, que deberá hacerse: 1.º, de lo mueble y menos precioso: 2.º, de lo precioso y vasos sagrados: 3.º, de las heredades de menos valor; y el último, de las mas valiosas. En nada de esto hay dispuesto algo de nuevo, como aparece de las notas del Sr. Gregorio López, y de los lugares canónicos que cita.

47. Son bien dignas de notarse las siguientes palabras con que concluye esta ley segunda: *E como quier que los Prelados pueden vender ó enagenar las cosas de la Iglesia por alguna de las maneras sobre dichas; empero las heredades que los emperadores, ó los reyes, ó sus mugeres oviesen dado á las Egleſias, non las pueden enagenar en ninguna manera*: de las cuales palabras se colige con toda claridad que el autor de las Partidas no intentó ni aun remotamente usar de potestad alguna suya en este asunto, porque no puede decirse que de lo que de su libre voluntad dieron los príncipes á la Iglesia, ni con su voluntad pueda enagenarlo. Es por lo mismo indudable que todo se dejó en los términos recibidos por el derecho canónico con anticipación á las Partidas.

48. Las leyes III y siguientes hasta la X inclusive hablan del enfiteusis de las donaciones que pueden hacer los obispos, de la solemnidad que puede preceder, de la calificación de las causas, del consejo que el obispo debe tener con su cabildo para que valgan las enagenaciones que se hagan; mas en todas estas leyes sucede lo mismo; es decir que nada traen de nuevo, como aparece de las notas en las que el señor Gregorio López cita las disposiciones canónicas anteriores á que hizo alusión el autor de las Partidas.

49. Por no ser molesto repitiendo una misma cosa, solo haré mención de otras tres leyes del mismo código, y sea la primera la ley XI del dicho título 14. 1.^a partida. Comienza esta ley con estas palabras: *Sin pena non deven fincar los preladados, ó los clérigos que malamente vendieren ó enagenaren las heredades de su Iglesia sin razon é sin derecho*. Pues si el legislador tuvo ánimo de manifestar su autoridad en este punto, ¿de qué modo pudo hacerlo mejor que imponiendo penas de suyo y que estuviesen en sus facultades? Y si no lo hizo así, sino que se redujo á repetir las disposiciones de la Iglesia, ¿qué puede inferirse, sino que bien contra su voluntad se le supuso por el Sr. Peña y Peña el ánimo y voluntad que nunca tuvo? *Al que ficiere tal cosa, sigue la ley, pudiendo vedar de su oficio, é tollerle el beneficio, é aun descomulgarlo fasta que la Iglesia cobre su heredad*, que es lo mismo que anticipadamente se estableció por los cánones.

50. Con respecto al comprador, en semejantes malas ventas ó enagenaciones, pone la dicha ley XI penas que en nada tocan á la

Iglesia, y que esta podrá valer segun le convenga, porque *escogencia tiene la Iglesia*, dice la ley última del dicho título, *en demandar sus cosas que fueren enagenadas sin derecho, al que fuere tenedor de ellas, ó al que las enagenó, ó cual mas quisiere dellos*; siendo de advertir que esta escogencia de que habla la ley la tuvo la Iglesia por cánones anteriores, como se ve en las notas del Sr. Gregorio Lopez.

51. La otra ley de que me parece oportuno hacer mencion para convencer hasta la evidencia que el Sr. Peña y Peña se separó del espíritu del sabio autor de las Partidas, y que contra el tenor espreso de sus leyes, quiso hecerlo autor de doctrinas que no le pasaron ni por la imaginacion, es la ley III título 15 de la misma 1.ª Partida, que dice así: "Cuidado debe haver el patron en guardar su Iglesia é sofrir trabajo por ella cuando menester fuere. Ca si alguno quisiere facer en ella ó en sus cosas daño ó menoscabo, él la debe amparar. Otrosi, sabiendo que los clérigos de las Iglesias fazen daño en las heredades de ella ó en los libros, ó en las vestimentas, ó en las otras cosas, dévenlos amonestar que lo non fagan; é si non lo quisieren dejar de fazer por él, dévelo fazer saber al obispo po ó á su vicario que los castigue que non menoscaben las cosas de la Iglesia. Mas si el obispo quisiese fazer ó fiziese algun menoscabo en ella, el patron lo debe decir al arzobispo que non se la consienta; é si el arzobispo quisiese fazer alguna de estas cosas, débelo decir al papa que lo faga castigar, que non lo faga; pues que otro mayor perlado non ha que lo pueda enmendar. E maguer el patron pueda esto fazer, non deben él nin sus herederos tomar nin enagenar ninguna cosa de la Iglesia, nin fazer engaño ninguno en ella; é si lo fiziese, dévenlo fazer afrenta hasta que lo torne; é si non lo quisiesen tornar, dévenlo descomulgar por ello; é esto se entiende seyendo el patron lego; mas si fuesse clérigo, dévenlo vendar de oficio é de beneficio fasta que enmiende; é aun si por esto non le quisiere enmendar, deve ser depuesto por ello."

52. Esta ley no necesita comentario, y ni un ligero vestigio se ve en toda ella de disposiciones de la potestad secular dirigidas á la Iglesia, y en verdad que no habia lugar mas oportuno para darlas si el sabio legislador hubiera intentado explicar de algun modo autoridad propia suya.

53. La tercera ley de que es útil hacer mencion es la 63 título 18, partida 3.ª, en las que se espresan las cláusulas que ha de tener la escritura que se otorgue de venta ó de otra clase de enagenacion de bienes de la Iglesia; para que tal escritura se estienda en los términos correspondientes, debe, dice la ley, ponerse en ella haber concurrido los requisitos necesarios para la enagenacion, y allí los espresa; mas no hay uno siquiera que suene ni aun ligeramente la intervencion de la autoridad secular en el caso, sino que todos son

los mismos que exigen las leyes de la Iglesia, y no otros, como puede verse en las notas del Sr. Gregorio Lopez.

54. Para negar yo, como niego, que el Sr. Peña y Peña hubiese podido fundar su dictámen en las leyes de partida, he citado las que hablan del asunto; y su señoría y todo el mundo sabe que segun doctrina del P. Murillo, libro 1.º número 21, ningun argumento legal puede sacarse de las introducciones ni de los rubros de las leyes sino en lo que con éstas estén conformes las introducciones ó rubros, ó como podrá decirse, atendiendo á los últimos usos, los considerandos con que comienza un proyecto nada valen, sino en lo que estén conformes con los artículos en que acaba.

55. La segunda parte del dictámen del Sr. Peña y Peña comprende el análisis que hace de los artículos de la ley, copiados en el número 39; y lo primero que segun mi entender debía haber fijado su señoría era las personas á quien se dirigia esta ley; es decir, si hablaba con las autoridades eclesiásticas que por derecho tienen facultad de enagenar en la forma y casos que previenen las leyes de la Iglesia ó de personas que efectuasen tales enagenaciones sin facultad alguna, porque es bien cierto que no podian comprenderse todas bajo una misma regla.

56. Lo primero que sobre esto dice el Sr. Peña y Peña es que la ley de que hablamos venia en auxilio de las leyes de la Iglesia; en el cual caso parece no haberse dirigido á los prelados, sino á otras personas particulares que sin facultad alguna se atreviesen á verificar tales enagenaciones, y á esto viene lo que su señoría dice de la tuicion ó defensa que la potestad secular debe prestar á la eclesiástica.

57. Despues ya varió de concepto el Sr. Peña y Peña, espresando que los prelados de la Iglesia debian sujetarse á estas leyes temporales, porque se trata de bienes que aunque pertenezcan á la Iglesia, son temporales: sobre lo que no solamente opondré á su señoría lo que he dicho desde el número 4 de este opúsculo hasta el 29 del mismo, ni solo opondré el tenor espreso de las leyes de Partida, sino la real resolucion de 18 de Noviembre de 1779, copiada en la ley 23 título 5.º libro 1.º de la Novísima Recopilacion, que dice así: "Declaro que la enagenacion de los bienes que se haga constar que están espiritualizados por cláusula espresa, corresponde á los prelados eclesiásticos con inhibicion de los tribunales y juzgados reales, así como de las fincas de obras pías que se hallen fundadas con caudales propios de Iglesias, ó con el producto de rentas episcopales, &c."

58. Despues manifestaré yo mi juicio sobre la ley de 31 de Agosto de 1843, y en el ínterin reproduzco lo que dije del número 31 al 37 de este Opúsculo.

59. Calificando el Sr. Peña y Peña el artículo 1.º de la ley,

dice que su contenido es el mismo que el de la constitucion del Sr. Paulo II, que se halla entre las extravagantes comunes *de rebus Ecclesie non alienandis*; y por cuanto que su señoría mismo dice que esta constitucion no está recibida entre nosotros, diré yo que si el artículo 1.º de la ley viene en auxilio de las leyes canónicas, puede decirse que está conforme con el cánón 15 del octavo concilio general, celebrado en Constantinopla en 869, y referido por Graciano en el cánón 13 caus. 12 cuest. 2.ª

60. A este cánón pudo atender el sabio autor de las Partidas, y no á la extravagante *Ambitiosae*, y ni aun al cap. 2.º *de rebus Ecclesie non alienandis* in 6.º que cita su señoría, como espeditos la extravagante mas de doscientos años, y el otro capítulo de nueve á diez años despues de concluido el Código de las siete Partidas (1).

61. Lo que el Sr. Peña y Peña dice sobre los artículos 2.º y 3.º de la ley, confirma lo que dije en el número 56, como es claro á cualquiera que lo lea.

62. Calificando su señoría el 4.º artículo, dice que está conforme con el capítulo 6.º título 13 libro 3.º de las Decretales, y con lo que á consecuencia de este testo canónico enseña el P. Murillo; ya he dicho que el Sr. Peña y Peña procedió sin fijar sus ideas, y lo que sobre este artículo y el 5.º dice su señoría, lo confirma hasta la evidencia. Sea en buena hora que cualquiera pueda denunciar una mala barata que se haga en los bienes de la Iglesia; debia su señoría haber dicho ante quién debia ponerse la denuncia, y por su amor á la verdad y por el respeto á las leyes de la Iglesia debia haber manifestado al supremo gobierno que con tan buena fé le consultó lo que sobre el particular establece la ley de Partida copiada en el número 51.

63. Sobre el artículo 6.º dice el Sr. Peña y Peña: primero, que los romanos pontífices Gregorio X y Paulo II prohibieron la enagenacion de alhajas y bienes preciosos de las iglesias sin licencia del romano pontífice; segundo, que estando tan distante Roma, nada tiene de extraño que por modo de traba, y en lugar de la licencia de Su Santidad, se exija y baste la del juez político; y tercero, que de este modo tanto el sabio y piadoso autor de las Partidas como el supremo decreto mexicano se propusieron llenar los justos y vehementes deseos del Padre universal de los fieles á beneficio del culto.

64. Cuál fuese la mente del sabio y piadoso legislador de las Partidas, lo dicen sus leyes, en especial la copiada en el número 51 y lo dice tambien muy repetidamente en sus notas el Sr. Gregorio

(1) La extravagante *Ambitiosae* se dió el año de 1468: el cap. II *de rebus Ecclesie non alienandis* in 6.º se dió el año de 1274; y el Código de las Partidas se concluyó en 1263, ó cuando mas largo en 1265, segun el Ensayo histórico critico de Martínez Marina, número 303.

Lopez; y con respecto á que la licencia de la Santa Sede pueda suplirse con la licencia de la potestad civil, no podrá decirlo sino el que ni aun ligeramente considere las cosas.

65. La licencia para la enagenacion de bienes eclesiásticos, no es otra cosa, como dije en el número 26, que una espresion de la voluntad de la Iglesia; y ¿está en potestad de alguno, sea el que fuere, entrometerse á dar consentimiento á nombre de la Iglesia, sin que al efecto esté autorizado por ella? La Iglesia ha dicho que para la enagenacion de tales cosas baste la licencia del rector de una Iglesia; que para la enagenacion de otras sea el obispo quien dé la licencia; que para la de otras, se requiera la del obispo con su clero; y que para la de otras se ocurra al romano pontífice; ó lo que es lo mismo, que la voluntad del dueño se manifieste á nombre suyo por este ó por el otro, segun los casos que ocurran y que la misma Iglesia tiene determinados.

66. Pues si no hay cánón alguno que autorice no ya á un juez inferior, pero ni á las supremas potestades para que en estos asuntos representen á la Iglesia, y á nombre suyo den su consentimiento y voluntad, ¿en qué jurisprudencia pudo hallar el Sr. Peña y Peña tal doctrina?

67. Si la *mano fuerte* de la que habla el Sr. Peña y Peña con motivo de haber citado la cédula 20 de Mayo de 1790 [1] oprimiere á la Iglesia, abusará de su poder; pero no hay en lo humano poder alguno que pueda revestirse del poder y autoridad de la Iglesia, ó pueda hacer que sin que haya voluntad de la Iglesia, pueda con verdad decirse que la Iglesia consiente.

68. No quiero declamar sobre esto, y cualquiera dirá sobre el artículo 7.º que bien faltaría de juicio el obispo que reconociera en la licencia de cualquiera autoridad secular, sea la que fuere, la licencia de la Iglesia.

69. A lo que parece, el Sr. Peña y Peña no vió este asunto con

(1) El motivo con que se dió esta cédula, que se halla en el tomo tercero de las Pandectas hispano-mexicanas, pag. 443, bajo el número 4909, fue el siguiente, segun de ella aparece. El provisor de México siguió autos en 1788 contra un ladrón sacrilego, lo condenó á presidio, conforme á la cédula de 14 de Octubre de 1770, e imploró el auxilio del brazo secular para la ejecución de su sentencia: la real sala del crimen le impartió el auxilio; pero al mismo tiempo consultó al rey sobre la inteligencia de esta cédula, pidiéndole se sirviese declarar que la imposición de penas *corporis afflictivos* estaba reservada á los magistrados públicos, esponiéndole que "la potestad temporal como protectora de los cánones, debia á la Iglesia el socorro de su *mano fuerte* para la ejecución de las sentencias penitenciales y correctoras que imponia á los fieles," con los demas alegatos que estimó por justos y se extractan en la dicha cédula, cuya resolución fue: que ni la sala debió haber impartido el auxilio que se le pidió, ni el provisor haber impuesto la pena de presidio.